

**EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:**

**CAPÍTULO I
MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL**

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 41 quinquies del Código Penal, por el siguiente:

ARTÍCULO 41 quinquies.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Código, en leyes especiales y en las leyes que incorporen tipos penales previstos en convenciones internacionales vigentes en la República Argentina, hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

Modificación y fundamento: En primer lugar, se destaca que NO se modifica el segundo párrafo que fue muy discutido en la reforma del año 2011, a pesar de la sugerencia contraria del FMI¹.

La modificación que se realiza es incluir los tipos penales previstos en convenciones internacionales vigentes en la República Argentina, lo que tiene su fundamento en la Recomendación 5 del GAFI². De este modo, con la modificación establecida, quedan sujetos dentro del tipo penal los delitos contemplados en los convenios previstos en el Anexo de la Convención prevista en la citada Recomendación³. Además, el FMI lo resaltó como

¹ Expresamente, la UIF señaló que: “Por último, respecto al segundo párrafo del art. 41 quinquies, consideramos que es un tema complejo, que fue muy discutido por el Congreso de la Nación en el año 2011. Su redacción está vinculada a evitar episodios llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, cabe resaltar que Respecto de la modificación del artículo 41 quinquies, el evaluador indicó en junio del año 2014 en el undécimo informe de seguimiento regular lo siguiente: “Por un lado, la cobertura de los actos terroristas de Argentina es más amplia que la Convención de FT y la Recomendación Especial II dado que resulta aplicable a cualquier acto delictivo cometido en Argentina con una finalidad terrorista. Por otro lado, es ligeramente más restrictiva con respecto al Artículo 2(1)(a) de la Convención de FT, dado que requiere la intención de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. El Artículo 2(1)(a) requiere que los actos mencionados sean considerados actos terroristas per se, esto es, sin la necesidad de demostrar cualquier otro elemento adicional de finalidad. Además, existe una disposición que indica que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Si bien se entiende que las autoridades argentinas incluyeron esta disposición con el propósito de preservar determinados derechos de reunión, esta no es una excepción prevista en la Convención de FT ni en la Recomendación Especial II y, por lo tanto, puede resultar, de algún modo, limitante. Sin embargo, dado que esto parece poner la carga de la prueba en cabeza de la persona que busque hacer valer la protección de esta excepción en lugar de convertir en deber del fiscal el demostrar que la excepción no resulta aplicable, esto no resulta un problema significativo”.

² La Recomendación 5 del GAFI establece que los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

³ El artículo de la Convención establece en su artículo 2.1.a) que: “1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado”.

indispensable y observó que hay dos de los Convenios Internacionales que constan en el Anexo de la Convención referida que no se encuentran vigentes, ya que si bien el país los suscribió, no fueron aprobados por Ley del Congreso, por lo que resulta necesaria su aprobación⁴.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 303 del Código Penal, por el siguiente:

ARTÍCULO 303.-

1) Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, fondos u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000.-), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1) será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de TRES (3) a DIEZ (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

3) El que recibiere o poseyere bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1), que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1), el autor será reprimido con la pena de prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

Modificación y fundamento: En el inciso 1) se agrega el verbo adquirir y en el inciso 3) se

Los tratados previstos en el Anexo son:

1. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
2. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
3. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
4. Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980.
6. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
7. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.
8. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
9. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

⁴ Protocolo complementario de la Convención para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (2010) y Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (2010).

agrega el verbo poseer así como la denominación “otros activos” luego de hacer referencia a los bienes.

El fundamento del agregado de los dos verbos típicos es la Recomendación 3 del GAFI⁵. Esta observación fue realizada además por el equipo evaluador de GAFI en el Informe de Evaluación Mutua del año 2010.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que, durante las reuniones llevadas a cabo en la elaboración del proyecto, el representante del Poder Judicial de la Nación señaló, por escrito, que tal como surge de la redacción de los instrumentos internacionales que fueron citados en el proyecto, como fundamento de la ampliación de los verbos típicos del tipo penal de lavado, surge que la recepción abarca las acciones de adquisición y posesión. En este sentido, mencionan como acciones típicas para la configuración a la ‘adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito’. Es decir, expresamente la norma que se cita como fundamento de la ampliación de los verbos del tipo penal, utiliza el término “recepción” para englobar las conductas de adquisición y posesión, al referirse que el sujeto debe conocer el origen ilícito de los bienes -hayan sido adquiridos, poseídos o utilizados- al momento de su recepción. Asimismo, agregó que la doctrina dominante sostiene que la acción de recibir comprende la adquisición, la posesión y el uso propiciados por las normas internacionales.

Con respecto a “otros activos”, la observación surge del Glosario General de GAFI y de la sugerencia del FMI, que exigió incorporarlo dentro de las definiciones del art. 4 bis de la Ley 25.246. Este agregado se incorpora en varios artículos del proyecto.

Por último, se destaca que durante las reuniones llevadas a cabo en la elaboración del proyecto, se discutió la modificación de los \$ 300.000 que funciona como una condición objetiva de punibilidad. La fijación de un monto como condición objetiva de punibilidad responde a la necesidad de castigar con una pena mayor aquellas conductas que afecten de manera significativa al bien jurídico protegido.

Al respecto, se analizó la posibilidad de actualizar el monto, introducir una fórmula que permita su actualización periódica automática, suprimir el importe o bien dejarlo como está. Finalmente, se tomó esta última determinación, en atención a que se consideró que el aumento del monto podría perjudicar la investigación de procesos penales en curso en virtud de la aplicación del principio de la ley penal más benigna.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 306 del Código Penal, por el siguiente:

ARTÍCULO 306.-

1. Será reprimido con prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años y multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere fondos u otros activos, de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:

a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

d) Para financiar, para sí o para terceros, el viaje o la logística de individuos y/o cosas a un Estado distinto al de su residencia o nacionalidad, o dentro del mismo territorio nacional, con el propósito de perpetrar, planear, preparar o participar en delitos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies;

e) Para financiar, para sí o para terceros, la provisión o recepción de entrenamiento para la

⁵ La recomendación 3 del GAFI prevé que “Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo”. Ambos instrumentos prevén expresamente los verbos que se incorporan.

comisión de delitos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se financia o se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso de los incisos b) y c) la organización o el individuo se encontraran fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

Modificación y fundamento: Se incorpora la acepción “fondos u otros activos”, con fundamento en el Glosario General de GAFI. Con la incorporación propuesta quedarían alcanzados por la norma todos aquellos activos, que no configuren bienes o dinero per se, y sean estos tangibles o no. En este sentido, debe evaluarse esta modificación teniendo en consideración que la nueva redacción permite ampliar el ámbito de aplicación de la norma. Esto podría encontrar fundamento en el desarrollo tecnológico y los nuevos mercados y/o transacciones (un ejemplo de ello podrían ser los activos digitales).

Además, se incorpora a los combatientes terroristas extranjeros de conformidad con la Resolución 2174/2014 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Recomendación 5 del GAFI⁶.

CAPÍTULO II

MODIFICACIONES DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como artículo 4° bis, en el CAPÍTULO II a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTÍCULO 4° bis.- A los fines de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias se establecen las siguientes definiciones:

Activos virtuales: Representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones (moneda fiduciaria).

Acto terrorista: Acto que constituye un delito previsto en el Código Penal, en leyes especiales y en las leyes que incorporen tipos penales dispuestos en convenciones internacionales vigentes en la República Argentina y cualquier otro acto que se ejecutare con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Beneficiario/s Final/es: La(s) persona(s) humana(s) que posee(n) participación y/o derechos de voto y/o ejerza(n) por cualquier otro medio el control directo o indirecto de una sociedad, persona jurídica u otras entidades contractuales o estructuras jurídicas y/o la(s) persona(s) humana(s) que ejerza(n) su control efectivo final, con el alcance que se defina en la reglamentación.

En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares

⁶ La nota interpretativa de la Recomendación 5 indica que: “El financiamiento al terrorismo incluye la financiación del viaje que hacen individuos a un Estado distinto de sus Estados de residencia o nacionalidad con el objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas o proveer o recibir entrenamiento terrorista”.

nacionales o extranjeras, incluye a la/s persona/s humana/s que actúe/n o participe/n en dicha estructura bajo cualquier denominación, como asimismo la/s persona/s humana/s que cumpla/n las condiciones del párrafo precedente, respecto de cada una de las partes del contrato.

Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de beneficiario/s final/es conforme a la definición precedente, se considerarán beneficiario/s final/es a la/s persona/s humana/s que tenga/n a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica, según corresponda.

Cientes: Todas aquellas personas humanas, jurídicas, u otras estructuras jurídicas - nacionales y/o extranjeras-, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.

Enfoque basado en riesgos: Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.

Fondos u otros activos: Cualquier activo, incluyendo, aunque no exclusivamente, los activos financieros, recursos económicos (incluyendo al petróleo y otros recursos naturales), bienes de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, sin perjuicio del modo que hayan sido adquiridos, y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad de, o la participación en, tales fondos u otros activos, incluyendo, aunque no exclusivamente, los créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros postales, acciones, valores, bonos, letras de cambio o letras de crédito, y cualquier participación, dividendo u otros ingresos en, o valor acumulado a partir de, o generado por, tales fondos u otros activos y cualquier otro activo que pueda ser potencialmente utilizado para obtener fondos, bienes o servicios.

Organismos de contralor específicos: Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Superintendencia de Seguros de la Nación, y los que en el futuro se incorporen a través de la reglamentación.

Personas Expuestas Políticamente: Personas humanas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales, respecto de las cuales la reglamentación respectiva establecerá medidas de debida diligencia adicionales (o especiales) que deberán cumplir en razón de aquello.

Organizaciones sin fines de lucro: Las personas jurídicas sin fines de lucro cuya actividad habitual sea la recaudación o desembolso de fondos para propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales.

Proveedor de servicios de activos virtuales: Cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: i. intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias); ii. intercambio entre una o más formas de activos virtuales; iii. transferencia de activos virtuales; iv. custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y v. participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

Modificación y fundamento: Se incorpora este artículo con el objeto de dejar en claro ciertos conceptos que resultan trascendentes para el sistema contra el LA/FT. Además, hay algunos conceptos como “activos virtuales” que no constan en el ordenamiento jurídico argentino, por lo que resulta necesaria su definición.

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 5°.- Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley.

Modificación y fundamento: Se agrega la autarquía funcional, administrativa y económica a la financiera, a los fines de cumplir con lo dispuesto en la Nota Interpretativa de la Recomendación 29 del GAFI⁷. La ampliación de la autarquía proyectada refleja mejor la realidad del funcionamiento actual del Organismo. A modo de ejemplo, contra las resoluciones que emite la UIF, no procede el recurso de alzada, sino que la vía impugnativa es el recurso directo ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 6°.- La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:

1. El delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, preferentemente provenientes de la comisión de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737 o la que en el futuro la reemplace;

b) Delitos de contrabando, especialmente en los supuestos agravados, previstos en la Ley N° 22.415 o la que en el futuro la reemplace;

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos previstos en el artículo 210 del Código Penal, organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales;

e) Delito de fraude contra la Administración Pública previsto en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal;

f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del TÍTULO XI del LIBRO SEGUNDO del Código Penal;

g) Delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis y 128 del Código Penal;

h) Delitos cometidos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies del Código Penal;

i) Delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal;

j) Delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal;

k) Delitos del Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la Ley N° 27.430 o la que en un futuro la reemplace;

l) Delitos de trata de personas previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;

m) Delitos de fraude al comercio y a la industria previstos en los artículos 300, 300 bis, 301 y 301 bis del Código Penal;

n) Delitos contra la salud pública y que afecten el medio ambiente previstos en los artículos 200, 201, 201 bis y 204 del Código Penal, y los previstos en las Leyes N° 24.051 y N° 22.421;

2. El delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal.

⁷ La nota interpretativa de la Recomendación 29 dispone que “La UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que la UIF debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar información específica. En todos los casos, ello significa que la UIF tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes.

Modificación y fundamento: Se actualiza el enunciado de los delitos precedentes al lavado de activos, contenido en el artículo 6° de dicha ley, a los que preferentemente la UIF debe abocar su tarea, incorporándose aquellos contra el fraude y la industria, la salud y los que afectan el medioambiente. Asimismo, se realizan algunas correcciones formales.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 13.- Es competencia de la Unidad de Información Financiera (UIF):

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley. Dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación;
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos y de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6° de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para el ejercicio de las acciones pertinentes;
3. Colaborar con los órganos judiciales y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes y de financiación del terrorismo, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente.

Modificación y fundamento: Se elimina, en el inciso 1, el término “en curso”. De esta manera la información puede ser utilizada en cualquier etapa de investigación, incluso si está terminada. Por su parte, en el inciso 3 se mejora la redacción.

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 14.- La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Dichos sujetos, en el marco de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias de personas humanas o jurídicas que en ningún caso podrán ser anónimas.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos y/o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: i) que requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación; y ii) que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20 de esta ley, aplicando un enfoque basado en riesgos. A efectos de

implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10.

El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.

En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia.

8. Aplicar las sanciones previstas en el CAPÍTULO IV de la presente ley, previa instrucción de un sumario administrativo que garantice el debido proceso.

9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.

10. Emitir directivas e instrucciones, de acuerdo con un enfoque basado en riesgos, que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados previstos en los incisos 19 y 20 del artículo 20 de la presente ley, podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.

11. Disponer, sin demora, con comunicación inmediata al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y/o al juzgado federal con competencia penal, según corresponda, a fin de que efectúe el examen de legalidad pertinente y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el congelamiento de fondos y otros activos y el aseguramiento de que ningún otro fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona o entidad, ya sea designada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS, en el marco de lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas o por el país en virtud de las Resoluciones vigentes del Consejo mencionado, en lo relativo al terrorismo y su financiación.

12. Disponer, sin demora, con comunicación inmediata al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y/o juzgado federal con competencia penal, según corresponda, a fin de que efectúe el examen de legalidad pertinente y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el congelamiento de fondos y otros activos y el aseguramiento de que ningún otro fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona o entidad designada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS dentro del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, en lo relativo a la prevención e interrupción del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

13. Disponer medidas específicas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo.

Cuando tales medidas pudiesen tener como destinatario a un Estado extranjero o sus dependencias o a un organismo internacional, las medidas dispuestas en este apartado se adoptarán con previa conformidad del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

14. Celebrar acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y/o autoridades públicas nacionales, provinciales y/o municipales, a nivel operativo, estratégico y a los fines del diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas vinculadas al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Modificación y fundamento: Se realizan las siguientes modificaciones:

Inciso 1: Se establece que no existirá una limitación por secreto en el acceso a la información por parte de ella, además de los casos de reportes de operación sospechosa enviados por sujetos obligados, a los restantes casos que pueden dar origen al desarrollo de la inteligencia financiera, como las declaraciones voluntarias (que presentan aquellos que no son sujetos obligados y la información proveniente de organismos análogos extranjeros).

Inciso 6: se mejora la redacción.

Inciso 7: se incorpora el enfoque basado en riesgos en materia de supervisión, conforme Recomendaciones 1⁸, 26⁹ y 28¹⁰ del GAFI. Esto ya se encuentra plasmado en la Resolución N° 154/2018 de la UIF. Además, la profundización del enfoque basado en riesgos fue una exigencia central del FMI.

Inciso 10: se incorpora el enfoque basado en riesgos en materia de regulación por parte de la UIF, conforme Recomendación 1 del GAFI. Además, la profundización del enfoque basado en riesgos fue una exigencia central del FMI.

Incisos 11: se incorpora, a nivel legal, la facultad de la UIF disponer sanciones financieras dirigidas, es decir, el congelamiento de fondos y otros activos en materia de terrorismo y su financiación. Actualmente, la reglamentación de esta facultad está regulada en el Decreto 918/12 pero no está reconocida en una ley. Su fundamento es la Recomendación 6¹¹ del GAFI.

Inciso 12: se incorpora, a nivel legal, la facultad de la UIF de disponer sanciones financieras dirigidas, es decir, el congelamiento de fondos y otros activos en lo relativo a la prevención e interrupción del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su fundamento es la Recomendación 7¹² del GAFI. Respecto a este punto, la Recomendación del GAFI solo apunta a las sanciones financieras dirigidas. Se pretende copiar el sistema que ya funciona para los congelamientos administrativos de financiación del terrorismo, que ha demostrado funcionar exitosamente. Además, se aclara que durante la elaboración del proyecto se debatió si era necesario y/o conveniente regular el delito de financiación de la

⁸ La Recomendación 1 del GAFI establece que “Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.

⁹ La Recomendación 26 prevé que “Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen eficazmente las Recomendaciones del GAFI”. Asimismo, la Nota Interpretativa de la referida Recomendación indica que: “El enfoque basado en riesgo en materia de supervisión se refiere a: (a) el proceso general mediante el cual un supervisor, según su comprensión de los riesgos, asigna sus recursos a la supervisión ALA/CFT; y (b) el proceso específico de supervisión de las instituciones en el que se aplica un enfoque basado en riesgo ALA/CFT”.

¹⁰ La Recomendación 28 señala que “Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas deben estar sujetas a medidas de regulación y supervisión”.

¹¹ La Recomendación 6 dispone que: “Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo”, mientras que su Nota Interpretativa prevé que: “La Recomendación 6 exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o sea para el beneficio de: (i) alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”, como exige la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad (1999) y sus resoluciones sucesoras; o (ii) alguna persona o entidad designada por ese país en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad (2001).

¹² La Recomendación 7 establece que: “Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento”, mientras que su Nota Interpretativa añade que: “La Recomendación 7 exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas¹⁴ para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o sea para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad que tienen que ver con la prevención e interrupción del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

proliferación de armas de destrucción masiva. Finalmente, se llegó a la conclusión que ello no era necesario para cumplir con las exigencias internacionales y que la inclusión de un tipo penal exigía un análisis más profundo del tema.

Inciso 13: se incorpora la facultad de la UIF medidas específicas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo. Su fundamento es la Recomendación 19¹³ del GAFI. Teniendo en consideración que estas medidas, cuando son aplicadas a países pueden afectar las relaciones internacionales del país, se prevé la previa intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (medidas preventivas aplicables a las entidades declarantes).

Inciso 14: se incorpora la facultad de la UIF de Celebrar acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y/o autoridades públicas nacionales, provinciales y/o municipales. Su fundamento es la Recomendación 2¹⁴ y 29¹⁵ del GAFI.

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 17.- La Unidad de Información Financiera (UIF) recibirá reportes de operaciones sospechosas, manteniendo en secreto la identidad del sujeto obligado reportante.

Modificación y fundamento: Se suprime el segundo enunciado a los fines de garantizar el secreto de la identidad a los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Público Fiscal. Su fundamento radica en las Recomendación 21¹⁶ de GAFI y es una sugerencia del FMI¹⁷. El segundo párrafo se elimina porque se introdujo como declaración voluntaria en el artículo 14 inc. 2 comprendiendo a los sujetos no obligados.

ARTÍCULO 10.- Incorpórase como artículo 17 bis a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTÍCULO 17 bis- La información proveniente de un organismo análogo extranjero podrá ser utilizada sólo para los fines o propósitos para los que fue provista.

La Unidad de Información Financiera (UIF) no transmitirá la información recibida de los

¹³ La Recomendación 19 indica que: “Los países deben ser capaces de aplicar contramedidas apropiadas cuando el GAFI haga un llamado para hacerlo. Los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas independientemente de algún llamado emitido por el GAFI en este sentido. Tales contramedidas deben ser eficaces y proporcionales a los riesgos”.

¹⁴ La Recomendación 2 del GAFI prescribe que: “Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

¹⁵ La Nota Interpretativa de la Recomendación 29 del GAFI expresa que: “La UIF debe ser capaz asimismo de entrar en acuerdos o vincularse de manera independiente con otras autoridades competentes internas o contrapartes extranjeras sobre el intercambio de información”.

¹⁶ La Recomendación 21 del GAFI indica que: “Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben: (a) estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente, e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no; tener prohibido por ley revelar (“tipping-off”) el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) o información relacionada”.

¹⁷ El FMI señaló que “Resulta altamente aconsejable reflexionar sobre la conveniencia de incluir en la reforma de la ley el incremento de las reglas de protección de los reportes recibidos y los correlacionados reportes que, en su caso, sean diseminados por la UIF”.

organismos análogos extranjeros a ningún tercero, salvo autorización expresa previa del organismo remitente.

La información proveniente de un organismo análogo extranjero será tratada, analizada y protegida con el mismo secreto y confidencialidad con que se analiza, trata y protege a la información proveniente de fuentes nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la presente.

Modificación y fundamento: Se incorporan distintas previsiones vinculadas a la utilización, destino y reserva de la información recibida de otros organismos análogos extranjeros. Su fundamento son las Recomendaciones 29 y 37¹⁸ del GAFI.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 19.- Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo, ello será comunicado al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Cuando el análisis se encuentre vinculado con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.

Modificación y fundamento: Se corrige la redacción a los fines de determinar que la fuente del análisis no sea solo un reporte de operación sospechosa. Su fundamento es adaptar la norma a la práctica habitual, que otorga mayores herramientas para el cumplimiento de las funciones propias del Organismo.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 20.- Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), de conformidad con las normas que dicte dicho organismo, los siguientes sujetos:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, y aquellas a las que el Banco Central de la República Argentina extienda su aplicación, en ejercicio de sus competencias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y sus modificatorias.
3. Las remesadoras de fondos.
4. Las empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores.

¹⁸ La Nota Interpretativa de la Recomendación 29 de GAFI establece que: “Los países deben asegurar que la UIF tome en cuenta la Declaración de Objetivos del Grupo Egmont, así como sus Principios para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera para Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (estos documentos establecen una guía importante sobre el papel y las funciones de las UIF, y los mecanismos para el intercambio de información entre las UIF). La UIF debe solicitar la Membresía del Grupo Egmont”. La Recomendación 37 de GAFI agrega que: “Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente, el mayor rango posible de asistencia legal mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con el lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Los países deben contar con una base jurídica adecuada para prestar asistencia y, cuando corresponda, deben tener establecidos tratados, acuerdos u otros mecanismos para mejorar la cooperación. En particular, los países deben: ...” e) Mantener la confidencialidad de las solicitudes de asistencia legal mutua que reciben y la información en ellas contenida, sujeto a los principios fundamentales de derecho interno, con el objeto de proteger la integridad de la investigación o la investigación preliminar. Si el país que recibe la petición no puede cumplir con el requisito de confidencialidad, debe informarlo con prontitud al país que emite la solicitud”.

5. Los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos.
6. Los proveedores no financieros de crédito, no previstos en otros supuestos de este artículo.
7. Las personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, conforme las definiciones contenidas en la Ley N° 26.831 y sus modificatorias, y en las reglamentaciones dictadas por ese organismo, para operar en el ámbito del mercado de capitales como Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación y demás intermediarios que cumplan funciones equivalentes; Agentes de Colocación y Distribución que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por esa Comisión; Agentes Asesores Globales de Inversión y demás personas jurídicas a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil de riesgo del cliente en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; Agentes Depositarios Centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la Ley N° 20.643; Agentes de Custodia, Registro y Pago o aquellos agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia y/o pago de valores negociables; y los fiduciarios financieros contemplados en el Capítulo 30 del Título IV del LIBRO TERCERO del Código Civil y Comercial de la Nación y sus modificaciones, que actúen en ese carácter en fideicomisos financieros con oferta pública autorizada por la citada Comisión.
8. Las Plataformas de Financiamiento Colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo.
9. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, previstas en la Ley N° 20.091 y sus modificatorias.
10. Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación que actúen como Agentes Institores, Sociedades de Productores Asesores de Seguros y Productores Asesores de Seguro, cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nros. 17.418, 20.091, y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias, que operen en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro.
11. Las asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, reguladas por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y sus modificatorias, en función de la actividad que desarrollen.
12. Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros, comprendidas en el artículo 9º de la Ley N° 22.315 y sus modificatorias.
13. Los proveedores de servicios de activos virtuales.
14. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que como actividad habitual, exploten, administren, operen, o de cualquier manera, organicen, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar.
15. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que realicen corretaje inmobiliario.
16. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

17. Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos, y cualquier otro profesional, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones: a) compra y/o venta de bienes inmuebles; b) administración de dinero, valores y/u otros activos; c) administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores; d) organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y, e) creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

En el caso de los contadores, quedan comprendidas, además de las transacciones señaladas, las siguientes actividades: confección de informes de revisión limitada de estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación y confección de informes de auditoría de estados contables.

Los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes, no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que éstos están sujetos al secreto profesional.

18. Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo, alguna de las siguientes transacciones, a nombre y/o por cuenta de sus clientes: a) actúen como agente creador de personas jurídicas; b) actúen por sí o faciliten la actuación de otros, como director, apoderado, socio, o una posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate; c) provean domicilio legal, comercial o postal y/o espacio físico para personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y, d) actúen como fiduciario por sí (o faciliten la actuación de otros) de un fideicomiso no financiero o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.
19. Los registros públicos, y los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas correspondientes, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
20. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
21. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificatorias).
22. Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las asociaciones y/o entidades afiliadas.

Modificación y fundamento: En primer lugar, se modificó la referencia de “personas físicas” a “personas humanas”, de conformidad con el CCCN; y se amplió la referencia a “otras estructuras jurídicas” en la enunciación de los sujetos obligados (como las UT).

En segundo término, el criterio general para las incorporaciones fue la utilización del Glosario de GAFI, con las adaptaciones del derecho interno.

Se incorporan como sujetos obligados:

i) Proveedores de servicios de activos virtuales. Fundamento: Recomendación 15¹⁹ y Glosario del GAFI. Se deja constancia que a los fines de cumplir acabadamente con la Recomendación 15 de GAFI, es necesario prever, además de que sean sujetos obligados a informar a la UIF, su licenciamiento o registración ante un organismo público, su regulación y supervisión;

ii) Proveedores no financieros de crédito. Fundamento: Glosario del GAFI;

iii) Abogados, únicamente cuando desarrollan determinadas actividades expresamente prevista por el GAFI. Fundamento: Recomendación 22²⁰ y Glosario del GAFI. Se destaca que la inclusión de los abogados no incluye su actuación en juicio, sino que apunta a los abogados corporativos y los grandes estudios jurídicos;

iv) Proveedores de servicios societarios o fiduciarios. Fundamento: Recomendación 22 y Glosario del GAFI. En este caso, se apunta además de los abogados corporativos, a otros profesionales que, de manera habitual, se dedican a constituir sociedades, o participar como directores o apoderados de sociedades, o que prestan el domicilio de su estudio profesional como domicilio de sociedad o que son fiduciarios de fideicomisos no financieros;

v) aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y/o administración de efectivo o valores líquidos. Su Fundamento es el Glosario del GAFI.

Asimismo, se suprimen como sujetos obligados a se destacan a las personas jurídicas sin fines de lucro (asociaciones civiles y fundaciones) y a ciertos productores de seguros. Su fundamento es el Glosario del GAFI.

Con respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro, cabe destacar:

i) en primer lugar, que las Recomendaciones del GAFI no exigen que las OSFL sean sujetos obligados a informar a la UIF, sino que la Recomendación 8 del GAFI sostiene que los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo, a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, si bien se prevé que dejen de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos, se los regula en un artículo posterior, poniendo el eje en la prevención de la financiación del terrorismo, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI;

ii) en segundo término, cabe destacar que en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos recientemente aprobada por el país se ha concluido que las asociaciones civiles y fundaciones tienen un riesgo bajo de ser utilizadas para operaciones vinculadas con el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

iii) en tercer lugar, mantener a este tipo de entidades como sujetos obligados afecta el enfoque basado en riesgos que debe tener todo el sistema antilavado y exige a la UIF supervisar el sector completo de las OSFL, lo que impide dirigir sus recursos –que son escasos- a la supervisión de los sectores más riesgosos.

iv) en último término, la supresión se fundamenta, adicionalmente, en la necesidad de abordar los problemas que afrontan las entidades sin fines de lucro pequeñas y medianas

¹⁹ La Nota Interpretativa de la Recomendación 15 del GAFI sostiene que: “A los efectos de la aplicación de las Recomendaciones del GAFI, los países deben considerar los activos virtuales como “bienes”, “productos”, “fondos”, “fondos y otros activos” u otros activos de “valor equivalente”. Los países deben aplicar las medidas pertinentes en virtud de las Recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)”.

²⁰ La Recomendación 22 del GAFI prevé que: Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las siguientes situaciones: ...Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores – cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: v compra y venta de bienes inmobiliarios; v administración del dinero, valores u otros activos del cliente; v administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; v organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; v creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales...”.

sin recursos técnicos y financieros, que tienen que cumplir todas las obligaciones previstas por la UIF. Asimismo, al ser sujetos obligados ante la UIF, las instituciones financieras aplican una debida diligencia financiera cuando una entidad de este tipo quiere participar del sistema financiero, lo que provoca un problema de inclusión financiera.

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (lista de entidades declarantes sujetas a obligaciones de ALA/CFT).

Sin perjuicio de ello, el FMI solicitó que se excluya del elenco de sujetos obligados a los sujetos obligados del sector público, lo que fue rechazado por la UIF²¹.

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 21.- Las personas señaladas en el artículo 20 de la presente ley quedarán sometidas a las siguientes obligaciones, conforme lo establezca la normativa que dicte la Unidad de Información Financiera (UIF):

a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio, residencia y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto.

Deberán identificar a sus clientes, mediante la información y, en su caso, la documentación que se pueda obtener de ellos y verificar su veracidad utilizando fuentes, información o documentos confiables e independientes.

Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la resolución respectiva.

Asimismo, deberán identificar al/los beneficiario/s final/es y tomar medidas razonables para verificar su identidad.

Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique a la persona por quien actúan.

b. Reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin demora alguna, todo hecho u operación, sean realizados/as o tentados/as, sobre los/las que se tenga sospecha o motivos razonables para sospechar que los fondos o activos involucrados provienen o están

²¹ Al respecto, la UIF señaló: “Si bien el país reconoce que el standard internacional no exige que los organismos sean sujetos obligados a informar, cabe señalar que los Organismos del sector público incluidos en el artículo 20 de la Ley Nro 25246, revisten el carácter de Sujetos Obligados, por una decisión de política legislativa desde hace más de 20 años.

A partir de dicha inclusión, los Organismos han contribuido enormemente, tanto en su función de sujeto obligado como de colaborador, al desarrollo y efectividad del sistema preventivo, invirtiendo una gran cantidad de recursos destinados a la materia.

Los fundamentos que cimantan la posición expuesta radica primordialmente en que: 1) Los citados sujetos obligados poseen el carácter natural de supervisores de un universo mayor de sujetos obligados, 2) Tienen acceso a información confidencial respecto de los mismos, 3) Al encargarse del monitoreo de sectores específicos de la economía tienen una mirada global con expertiz para detectar operaciones sospechosas y/o inusuales propias del sector en el que prestan sus funciones, 4) En base a la experiencia en recepción y análisis respecto a los reportes recibidos de dichos organismos, se avizora una exhaustividad y riguridad en el análisis de las operaciones reportadas mayor que la del resto de los SO.

En caso que se excluya como SO a los citados Organismos de Control, implicaría bajo una mirada pragmática, un debilitamiento del sistema ALA/CFT ya que tal sector dejaría de abastecer, a través de ROS y RFT, un caudal informativo de calidad en base a un conocimiento global de las operaciones con conocimiento técnico especializado propio de las funciones y competencias de los sectores que controlan.

Como una situación que ejemplifica lo antes expuesto se indica que, en especial con los ROS remitidos por el BCRA y la AFIP, a partir las tareas de monitoreo se han detectado tipologías de LA, lo que torna más relevante la inclusión de dichos organismos como SO.

Finalmente se señala que del relevamiento de la “Cantidad de ROS utilizados en Casos, discriminados por los Tipos de SO emitidos en el período 2017 – 2021”, surge que los reportes presentados por la AFIP, BCRA, INAES, la SSN y la IGI han alcanzado un 12% de total reportado, lo que otorga una idea del peso cuantitativo del sector y su significancia en el sistema preventivo LA/FT”.

vinculados con un delito o están relacionados con la financiación del terrorismo.

c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

d. Registrarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

e. Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgos.

f. Designar oficiales de cumplimiento que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera (UIF) del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de la presente ley es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.

En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad no constituida de conformidad con lo establecido en la LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, T.O. 1984 y modificatorias, u otra estructura con o sin personería jurídica, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.

Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 19 y 20 del artículo 20 de la presente ley, la persona designada deberá depender directamente de la máxima autoridad del organismo. La responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de la presente ley, corresponde exclusivamente al titular del organismo.

En el caso de que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.

g. Obtener información y determinar el propósito y la naturaleza de la relación establecida con el cliente.

h. Determinar el riesgo de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva asociados a los clientes; los productos, servicios, transacciones, operaciones o canales de distribución; las zonas geográficas involucradas; realizar una autoevaluación de tales riesgos e implementar medidas idóneas para su mitigación.

i. Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial, contractual, económica y/o financiera y establecer reglas de monitoreo que permitan examinar las transacciones realizadas durante todo el transcurso de la relación, para asegurar que las mismas sean consistentes con el conocimiento que el sujeto obligado tiene sobre el cliente, su actividad y su perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, el origen de los fondos.

j. Identificar a las personas humanas que ejercen funciones de administración y representación del cliente y a aquellas que posean facultades de disposición.

k. Adoptar medidas específicas a efectos de mitigar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, cuando se establezca una relación o se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación.

l. Contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el/los beneficiario/s final/es es/son una persona expuesta políticamente.

m. Determinar el origen y licitud de los fondos.

n. Conservar, por un período mínimo de DIEZ (10) años, en forma física o digital, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para poder cumplir rápida y satisfactoriamente con los pedidos de información efectuados por la

Unidad de Información Financiera (UIF) y/u otras autoridades competentes. Estos registros deben ser suficientes para permitir la reconstrucción de las transacciones individuales de manera tal que sirvan como evidencia. También deberán conservar todos los registros obtenidos a través de medidas de debida diligencia del cliente, legajos de clientes y correspondencia comercial, incluyendo los resultados de los análisis que se hayan realizado.

En los casos y con las limitaciones que establezca la reglamentación, los sujetos obligados podrán recurrir a otros sujetos obligados, para obtener información relacionada con la identificación de sus clientes.

Si el sujeto obligado no pudiera cumplir con las obligaciones previstas en los incisos a), g), h) e i) del presente artículo, ello deberá entenderse como impedimento para el inicio o la continuación de la relación con el cliente, sin perjuicio de que deberán realizar un análisis adicional para decidir si corresponde efectuar un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Modificación y fundamento: Se realizan las siguientes modificaciones: i) se modifica el concepto de Reporte de Operación Sospechosa conforme estándar GAFI (Recomendación 20)²². ii) se precisa y profundiza el enfoque basado en riesgo y se prevé que si el sujeto obligado no pudiera cumplir con las medidas de debida diligencia del cliente, ello deberá entenderse como impedimento para el inicio o la continuación de la relación con el cliente. Su fundamento es la Recomendación 10 del GAFI²³. Cabe aclarar que esta previsión ya está presente en algunas resoluciones de la UIF, referidas al sector financiero.

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (medidas preventivas aplicables a las entidades declarantes).

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 22.- Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información.

El deber de guardar secreto también rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y para quienes presenten declaraciones voluntarias ante dicho organismo.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera (UIF), así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF), serán reprimidos con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años.

Modificación y fundamento: Se amplía la obligación de guardar secreto a los funcionarios de la Unidad una vez terminado su vínculo con la UIF. Su fundamento es la Recomendación 29 del GAFI²⁴.

²² La Recomendación 20 del GAFI prescribe: “Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

²³ La Recomendación 10 del GAFI indica: “Si la institución financiera no pudiera cumplir con los requisitos aplicables en los párrafos (a) al (d) anteriores (sujeto a la modificación acorde al alcance de las medidas partiendo de un enfoque basado en riesgo), se le debe exigir a ésta que no abra la cuenta, comience relaciones comerciales o realice la transacción; o se le debe exigir que termine la relación comercial; y debe considerar hacer un reporte de transacciones sospechosas sobre el cliente”.

²⁴ La Nota Interpretativa de la Recomendación 29 establece que: “La información recibida, procesada, conservada o comunicada por la UIF tiene que estar firmemente protegida, tiene que intercambiarse y utilizarse sólo de acuerdo con los procedimientos acordados, las políticas y leyes y regulaciones aplicables.

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese la denominación del CAPÍTULO IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por la siguiente:

“CAPÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONATORIO”

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 23.- Cuando el órgano ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito al que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de ser sancionada con multa de QUINCE (15) a DOS MIL QUINIENTOS (2.500) módulos.

Modificación y fundamento: El inciso 1 del artículo fue removido, toda vez que el Código Penal fue modificado y el art. 213 quater fue derogado por la ley 26.734. A su vez, Se modifica el quantum de la multa por violación de secreto de la persona jurídica. Su fundamento es establecer sanciones más disuasivas, de acuerdo a la Recomendación 35 del GAFI²⁵.

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 24.- Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 20 de la presente ley, que incumplan alguna de las obligaciones establecidas en la presente, sus normas reglamentarias y/o en las resoluciones dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), previa sustanciación de un sumario administrativo, serán pasibles de las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento.
2. Apercibimiento con la obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina y hasta en DOS (2) diarios de circulación nacional a costa del sujeto punido.
3. Multa, de UNO (1) a DIEZ (10) veces el valor total de el/los bien/es u operación/es, en los casos que las infracciones se refieran a la no realización de los reportes de operaciones sospechosas o a su realización fuera de los plazos y formas previstos para ello.
4. Multa, de entre QUINCE (15) y DOS MIL QUINIENTOS (2.500) Módulos para el resto de los incumplimientos, por cada infracción.
5. Inhabilitación de hasta CINCO (5) años para ejercer funciones como oficial de cumplimiento.
6. Inhabilitación de hasta CINCO (5) años para ejercer funciones como miembro del órgano de administración, en los casos en que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica.
7. Revocación de la autorización para funcionar y/o matrícula habilitante para el ejercicio de la actividad.

En el caso de los incisos 3 y 4 precedentes, para el supuesto de concurrencia simultánea o sucesiva de varias infracciones independientes, la multa aplicable será la suma resultante de la acumulación de las multas correspondientes a cada infracción individual. En el caso

Por lo tanto, una UIF tiene que, contar con normas establecidas que rijan la seguridad y la confidencialidad de dicha información, incluyendo procedimientos para el manejo, almacenamiento, comunicación y protección de tal información, así como para el acceso a la misma. La UIF debe asegurar que su personal cuente con los niveles de autorización necesarios en cuanto a la seguridad y que entiendan sus responsabilidades en el manejo y comunicación de información delicada y confidencial. La UIF debe asegurar el acceso limitado a sus instalaciones y a la información, incluyendo sistemas de tecnología de la información”.

²⁵ La Recomendación 35 prevé que: “Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas cubiertas en las Recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos ALA/CFT. Las sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las APNFD, sino también a sus directores y la alta gerencia”.

que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica, igual sanción será aplicada a los integrantes de sus órganos de administración y dirección, quienes responderán en forma solidaria.

Las sanciones previstas en los incisos 6 y 7 precedentes serán comunicadas a los organismos de contralor específicos, registros y/u organizaciones profesionales que tengan a su cargo la regulación de la respectiva profesión o actividad, a fin de que adopten en el ámbito de su competencia los cursos de acción que permitan hacerlas efectivas, debiendo comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) el resultado de las gestiones realizadas y las razones esgrimidas para ello, dentro de los siguientes TREINTA (30) días.

Las sanciones previstas en la presente ley deberán ser eficaces, proporcionales y disuasivas y se aplicarán teniendo en cuenta la naturaleza y riesgo del incumplimiento, el tamaño organizacional del sujeto obligado, los antecedentes y conductas del caso, el volumen habitual de negocios del sujeto obligado y la condición de reincidente.

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, y encontrándose firme la misma, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.

Facúltase a la Unidad de Información Financiera (UIF) a revisar y, en su caso, actualizar en cada ejercicio presupuestario el valor asignado al Módulo, que se establece en forma inicial en la suma de PESOS VEINTE MIL (\$20.000).

Modificación y fundamento: Las modificaciones son:

i) Se crean nuevos tipos de sanciones, incorporándose las de apercibimiento, apercibimiento con obligación de publicar, inhabilitación para ejercer funciones como oficial de cumplimiento, inhabilitación para ejercer funciones como miembro del consejo de administración, y revocación de la autorización para funcionar y/o matrícula habilitante para el ejercicio de la actividad. En los dos últimos casos, se prevé la comunicación al organismo u organización profesional correspondiente a fin de que adopten en el ámbito de su competencia los cursos de acción que permitan hacerlas efectivas, debiendo comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) el resultado de las gestiones realizadas y las razones esgrimidas para ello, dentro de los siguientes TREINTA (30) días. En relación a este apartado, el estándar internacional exige que haya una amplia gama de sanciones, que vayan desde un apercibimiento hasta la revocación de la autorización para funcionar. La dificultad de nuestro país es que, en materia de prevención de lavado de activos, la UIF es el único organismo con competencia para aplicar sanciones, como sucede en algunos otros países. Es decir que mientras que, por ejemplo, el Banco Central autoriza a funcionar a un Banco, o el Colegio de Abogados otorga la matrícula de un abogado, la UIF, a partir de ahora, va a tener la competencia para revocar esa autorización, sin perjuicio de la comunicación al organismo u organización profesional correspondiente.

ii) se establecen factores de ponderación para la aplicación y gradación de las sanciones, lo que permite garantizar su proporcionalidad, de conformidad con la Recomendación 35 del GAFI y los principios del derecho administrativo sancionador;

iii) se aumenta, en forma sustantiva, el monto de las sanciones cualitativas, lo que permite garantizar su carácter disuasivo, de conformidad con la Recomendación 35 del GAFI y los principios del derecho administrativo sancionador;

iv) se prevé la incorporación de una unidad de medida (Módulos) para las sanciones cualitativas, que permitan su actualización periódica por parte de la UIF;

v) se identifican, en forma expresa, cuáles son las infracciones que dan lugar a las sanciones, diferenciando, en el caso de las multas, el incumplimiento de no reportar operaciones sospechosas del resto, a los fines de cumplir el principio de tipicidad propio del derecho administrativo sancionador.

Su fundamento es la Recomendación 35²⁶ del GAFI.

²⁶ La Recomendación 35 prevé que: “Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas cubiertas en las Recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (régimen de sanciones administrativas).

Sin perjuicio de ello, el FMI consideró insuficiente la modificación propuesta, toda vez que se deben establecer reglas para las infracciones, distinguiendo entre distintas gravedades, y las correlativas sanciones. Asimismo, indicó que las sanciones previstas no son disuasivas. La UIF rechazó la sugerencia²⁷.

ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 24 bis a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTÍCULO 24 bis.- La acción para aplicar las sanciones previstas en el presente Capítulo prescribirá a los CINCO (5) años contados a partir del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de la fecha en que quede firme.

ALA/CFT. Las sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las APNFD, sino también a sus directores y la alta gerencia”.

²⁷ Al respecto, la UIF señaló que si bien es cierto que tanto en el derecho interno como en la legislación comparada, existen ejemplos de marcos sancionatorios que han adoptado ese esquema, lo cierto es que también encontramos tantos otros que no lo han hecho, lo cual demuestra que se trata de una decisión de política legislativa, respecto de la cual pueden formularse argumentos a favor o en contra, pero que de ninguna manera son determinantes y mucho menos pueden avalar observaciones como las que se enuncian. La identificación casuística, pormenorizada e individualizada de cada una de las infracciones en la ley atentaría con el dinamismo del régimen y la actitud proactiva que el concierto internacional le exige a las unidades de inteligencia financiera, con el peligro de que además se afecte, de manera indebida, el enfoque basado en riesgo que surge de las recomendaciones GAFI.

En efecto, si sólo por vía de hipótesis llevamos al extremo una recomendación como la esbozada, la identificación sugerida obligaría a prever una sanción para cada incumplimiento a una obligación. Es decir que, cada nueva obligación que se establezca obligaría a sancionar una ley, que debería prescribir no sólo la obligación sino también la sanción que resultaría aplicable frente a su incumplimiento, todo lo cual iría en detrimento del dinamismo esperable para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Asimismo estimamos que una regulación como la planteada, debido a que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben ser proporcionales a los riesgos identificados, obligaría a considerar ese enfoque en cada caso, lo que tornaría aún más compleja la formulación de la ley. Tampoco puede perderse de vista que el régimen sancionatorio no puede quedar reducido a una aplicación sistemática de sanciones, dado que respecto de ellos es necesario ejercer el debido juzgamiento, basado en la convicción que genera la autoridad que sanciona las circunstancias del caso en su sana discrecionalidad, lo que además es luego eventualmente apreciado por el poder judicial que puede revisar la legalidad y razonabilidad de las sanciones impuestas, asegurándose así la garantía de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo que nuestra carta magna consagra.

La excesiva regulación en pos de una suerte de regulación tarifada de las sanciones podría entonces no lograr los objetivos procurados. Así, por caso, la clasificación de las sanciones en leves, moderadas o graves, irían en contra del efecto disuasivo que la recomendación 35 del GAFI persigue, dado que establecería una suerte de permeabilidad del sistema a ciertos incumplimientos respecto de otros, cuando lo deseable es que ningún incumplimiento se verifique para la integridad del sistema de prevención.

Con respecto al monto de las sanciones, la UIF señaló que los valores de una parte de las incumplimiento que prevén actualmente multas en \$ 10.000 a \$ 100.000 se está realizando un salto cuantitativo es más que considerable, a lo que se añade la posibilidad de que sea corregido mediante una decisión de la UIF al modificar el valor del módulo, si es que efectivamente no se cumpliera con ese u otro parámetro que tornen aconsejable su actualización. Es decir que, en este caso, de verificarse el supuesto observado existiría la posibilidad de corregirlo en la forma que se menciona.

En relación a los otros incumplimiento que dan lugar a multas igual a 1 a 10 veces el valor de la transacción, La regulación propuesta, que en este punto mantiene la redacción actualmente vigente, establece un rango de 1 a 10 veces el valor total de los bienes u operación/es a los que se refiera la infracción, por lo que si bien es cierto que puede aplicarse el valor mínimo de esa escala, entendemos que el efecto disuasorio está presente y se materializa fundamentalmente antes de que la infracción se cometa; esto es, con la posibilidad concreta de ser sancionado en varias veces (hasta 10) el monto de la operación.

Si bien la política legislativa, en este caso, podría haber sido fijarla en 2 o más veces el valor de la transacción, lo cierto es que respecto de las personas jurídicas ello es así, dado que son sancionados, al menos una vez el valor de la escala, tanto la persona en sí como su órgano de administración.

Sobre el particular, cabe agregar que existe un precedente jurisprudencial de la CNACF en la que dicho órgano judicial dispuso que la sanción de 2 veces el valor de la transacción implicó un exceso de punición y ordenó, en consecuencia, el dictado de un nuevo acto administrativo que reduzca el monto de la multa.

Asimismo, las multas se pueden establecer de forma solidaria a la entidad y al órgano directivo, ya que son acumulativas por cada falta (es decir que difícilmente se limiten a un módulo).

El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente Capítulo se interrumpirá por la notificación del acto que disponga la apertura del sumario.

Modificación y fundamento: Se corrige una cuestión de lógica jurídica, relacionada con el acto de aplicación de sanciones, propiciando que sea su dictado y no su notificación, el hecho al cual asignar el efecto interruptivo, lo cual es razonable, dado que, de otra forma y tal como está regulado en la redacción vigente, el hecho interruptivo se verificaría cuando el acto ya se ha consumado, por lo que no podría de ninguna manera afectar el plazo para su dictado, volviendo intrascendente e insustancial tal previsión.

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 25.- Los actos emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) que impongan alguna de las sanciones previstas en el presente Capítulo, podrán recurrirse en forma directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad del acto recurrido y deberá interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los QUINCE (15) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de su notificación. El recurso tendrá efecto devolutivo y deberá correrse traslado por el plazo de TREINTA (30) días.

Serán de aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Modificación y fundamento: Se reglamenta el recurso judicial directo ante la CNACAF, estableciéndose un plazo de 15 días para su interposición y la obligación de correr traslado por 30 días. El fundamento es que la letra resulte más clara y completa, ya que la ley contenía vacíos respecto de estos temas (para mayor conocimiento del administrado y posibilidades de ejercer su derecho de defensa).

ARTÍCULO 20.- Incorpórase como artículo 25 bis a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTÍCULO 25 bis.- Las sanciones de multa deberán contener el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de módulos que ésta representa a la fecha de la resolución.

Las sanciones de multa deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto que disponga la sanción, estableciendo como lugar de pago el domicilio de la sede central de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cobro de las multas aplicadas, la Unidad de Información Financiera (UIF) seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Constituirá título ejecutivo suficiente la copia certificada de la resolución que aplicó la multa, sin que puedan oponerse otras excepciones que la de prescripción y la de pago total documentado.

Las multas impagas devengarán un interés compensatorio equivalente a la tasa de interés pasiva, o la que en el futuro la reemplace, que se divulga a través del Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina.

Modificación y fundamento: Se prevé que, para el cobro de las multas aplicadas, se siga el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se fija el plazo y lugar de pago y la tasa de interés compensatoria que resultará aplicable.

El fundamento es que la letra resulte más clara y completa, ya que la ley contenía vacíos

respecto de estos temas.

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 26.- Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso contencioso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley, se regirán por los artículos 1775 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, entendiendo por acción civil a la acción administrativa.

Modificación y fundamento: Esta modificación obedece a que el artículo actual hace referencia a artículos del Código Civil que ya no se encuentran vigentes.

ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

ARTÍCULO 27.- El desarrollo de las actividades y el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

- a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al MINISTERIO DE ECONOMÍA.
- b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
- c. Las multas que se impongan como consecuencia de la aplicación del Régimen Sancionatorio previsto en el Capítulo IV de esta ley.
- d. Los recursos derivados de delitos previstos en el artículo 6° de esta ley, a saber:
 - 1) El dinero o activos de liquidez similar secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley.
 - 2) El producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos derivados de esta ley.
 - 3) Los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también los fondos y/o ganancias obtenidas ilícitamente.
 - 4) El producido de las multas que se impongan como consecuencia de los delitos configurados en esta ley.

Dichos valores y/o bienes serán entregados por el Tribunal interviniente de manera inmediata al dictado de la sentencia o resolución judicial que lo dispusiere y serán destinados a la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo precedente:

- i. El producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos que tenga como precedente los citados delitos, así como los decomisos ordenados en su consecuencia. Los beneficios económicos y el producido de las multas que se impongan al respecto, tendrán como destino específico el fondo de asistencia directa a las víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo de la Ley N° 26.364 y sus modificatorias.
- ii. El producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos normados por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, así como los decomisos ordenados en su consecuencia, las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que se impongan; los que serán destinados a los programas establecidos en el artículo 39 de la citada ley.

En caso de tratarse de las sumas de dinero previstas en los incisos b), c) y d), se ordenará su transferencia a una cuenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) destinada a tal efecto, cuya administración estará a su cargo.

Modificación y fundamento: Se diferencian las multas del régimen administrativo sancionador de las penas de un proceso judicial. También se elimina el destino a una cuenta especial del Tesoro Nacional administrada por el PEN a los efectos de que dichos recursos ingresen directamente al organismo, procurando así dotar a la Unidad de los medios suficientes y adecuados para enfrentar la compleja misión que tiene asignada. El fundamento es dotar al organismo de mayor agilidad para el uso de los recursos propios y cumplir, de tal modo, las Recomendaciones 4²⁸ y 29²⁹ del GAFI.

ARTÍCULO 23.- Incorpórase como artículo 27 bis a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

ARTÍCULO 27 bis.- Exceptúase a la Unidad de Información Financiera (UIF) de ingresar, hasta el plazo máximo de DOS (2) años, al Tesoro Nacional los remanentes de recursos indicados en los incisos b), c) y d) del artículo 27 de esta ley.

Los saldos de dichos recursos, no utilizados al cierre de cada ejercicio, a partir del período presupuestario 2022, se transferirán a ejercicios subsiguientes.

Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a disponer ampliaciones presupuestarias de créditos y recursos, y su correspondiente distribución en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la incorporación de los remanentes señalados, como así también los originados en la mayor recaudación de recursos propios.

Modificación y fundamento: Se establece una excepción para devolución al Tesoro Nacional, de los remanentes de los recursos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo anterior, para que el Organismo pueda disponer, en un tiempo razonable, de dichos sobrantes y cumplir la Recomendación 29 del GAFI.

ARTÍCULO 24 – Incorpórase como CAPÍTULO VI a la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:

“CAPÍTULO VI

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”

Artículo 34: Los organismos y autoridades públicas que determine la reglamentación desarrollarán, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, las siguientes funciones de prevención de financiación del terrorismo:

1. Identificar el subsector de las organizaciones sin fines de lucro con riesgo de ser abusadas para la financiación del terrorismo.
2. Realizar un análisis de riesgos de abuso de las organizaciones sin fines de lucro para la financiación del terrorismo.
3. Establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, que promuevan la transparencia, integridad y confianza pública en la administración y manejo de las organizaciones sin fines de lucro.

²⁸ La Recomendación 4 del GAFI prevé que: “Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente”.

²⁹ La Nota Interpretativa de la Recomendación 29 del GAFI refiere que: “La UIF debe recibir los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, de una forma que garantice su autonomía e independencia y que le permita ejercer su mandato con eficacia”.

4. Identificar acciones efectivas para mitigar los riesgos de financiación del terrorismo de las organizaciones sin fines de lucro, en conjunto con los sectores correspondientes.
5. Desarrollar actividades formativas dirigidas a las organizaciones sin fines de lucro, con el fin de que conozcan los riesgos de financiación del terrorismo a los que están expuestas y las medidas de control interno que pueden implementarse para mitigarlos.
6. Supervisar el cumplimiento de las normativas administrativas que se dicten en relación con la prevención de los riesgos de financiación del terrorismo y sancionar su inobservancia.
7. Proveer información a las autoridades competentes sobre organizaciones sin fines de lucro, cuando éstas lo soliciten.
8. Establecer mecanismos efectivos para la cooperación internacional.
9. Comunicar a las autoridades competentes las sospechas de que una determinada organización sin fines de lucro:
 - a) Está involucrada en financiación del terrorismo y/o es una pantalla para la ejecución de actividades de financiación del terrorismo.
 - b) Está siendo explotada como conducto para el financiamiento al terrorismo, incluso con el propósito de evadir medidas de inmovilización de activos, o para otras formas de apoyo al terrorismo.
 - c) Está ocultando o encubriendo el desvío clandestino de fondos destinados a fines legítimos, pero que están siendo redireccionados para beneficio de personas vinculadas con operaciones de financiación del terrorismo.

Modificación y fundamento: Se incorpora un nuevo Capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8³⁰ del GAFI. Esta previsión se complementa con lo expresado en el comentario de la modificación del artículo 20, que suprime a las organizaciones sin fines de lucro del elenco de sujetos obligados y con el art. 4 bis que define a las personas jurídicas sin fines de lucro.

ARTÍCULO 25.- Deróganse los artículos 1, 2, 3, 4, 20 bis y 21 bis de la Ley N° 25.246.

CAPÍTULO III

REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES

ARTÍCULO 26.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA centralizará, como autoridad de aplicación, en un Registro de Beneficiarios Finales, en adelante “el Registro”, la información adecuada, precisa y actualizada, referida a aquellas personas humanas que revisten el carácter de beneficiarios finales en los términos definidos en el artículo 4 bis de la Ley N° 25.246.

Dicho Registro se conformará con la información proveniente de los Regímenes Informativos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a tal efecto, así como con toda aquella información que podrá ser requerida por la autoridad de aplicación a organismos públicos.

ARTÍCULO 27 - Todas las sociedades, personas jurídicas, u otras entidades contractuales o estructuras jurídicas, constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA o de origen extranjero, que realicen actividades en el país y/o posean bienes y/o activos situados y/o colocados en el

³⁰ La Recomendación 8 del GAFI sostiene que: “Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo, a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo”.

país, deberán informar su/s Beneficiario/s Final/es en el marco de los regímenes mencionados en el artículo 26 de la presente, a los efectos de su incorporación al Registro, en los términos y bajo las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, dentro del plazo de SESENTA(60) días a contar desde la entrada en vigencia de la presente.

Asimismo, resultarán alcanzadas por la mencionada obligación aquellas personas humanas residentes en el país o sucesiones indivisas radicadas en él que posean participaciones societarias o equivalentes en entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, inclusive en empresas unipersonales de las que resulten titulares, como asimismo aquellos sujetos residentes en el país que actúen o participen, bajo cualquier denominación en fideicomisos, figuras fiduciarias, trusts, fundaciones, o de naturaleza jurídica equivalente, constituidas en el exterior de acuerdo con la legislación vigente en el respectivo país.

ARTÍCULO 28.- La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Incorporar y mantener actualizada la información referida a beneficiarios finales;
- b) Recibir información de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de otros organismos públicos, para la identificación, verificación e incorporación de beneficiarios finales al Registro;
- c) Emitir las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del Registro y para la recepción de información referida a beneficiarios finales de otros organismos públicos;
- d) Suscribir convenios con otros organismos públicos, a fin de intercambiar información y llevar a cabo acciones comunes vinculadas al objeto del Registro.

ARTÍCULO 29.- El Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrán acceso a la información contenida en el Registro, en el marco de sus competencias.

Los organismos de contralor específicos –Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, así como los Registros Públicos y organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, tendrán, en el marco de sus competencias, acceso a la información contenida en el Registro, en los términos que determine la autoridad de aplicación.

Los sujetos incluidos en el artículo 27 de la presente tendrán acceso a la información referida a sus beneficiarios finales contenida en el Registro, con los alcances, procedimiento y limitaciones que establezca la autoridad de aplicación, y podrán ponerla a disposición de los sujetos obligados establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, a su requerimiento.

ARTÍCULO 30.- El incumplimiento o cumplimiento parcial de los deberes de información sobre beneficiarios finales previstos en el artículo 27, dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Modificación y fundamento: En consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI aprobada en el mes de marzo del presente año, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas, a fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), garantizando a las autoridades competentes en la materia el pleno acceso al mismo.

La importancia de la identificación de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas ha sido destacada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (OCDE), que realiza evaluaciones a los países, en las que se

verifica si la jurisdicción posee información de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas (independientemente del organismo local que la posea).

Conocer quiénes son, en última instancia, las personas humanas que se benefician de los resultados económicos positivos de las personas y estructuras jurídicas permite una labor más eficaz de los organismos de control y de las autoridades judiciales.

Hasta el momento, diversos organismos públicos poseen información respecto a los beneficiarios finales, pero no existe un registro centralizado al que las autoridades competentes puedan obtener o al cual puedan acceder de manera rápida y eficiente.

De tal modo, el registro de beneficiarios finales, que se conformará con la información proveniente de los Regímenes Informativos establecidos por la AFIP a tal efecto, así como con toda aquella información que podrá ser requerida por la autoridad de aplicación a otros organismos públicos, unificará la diversidad de conceptos existentes al día de la fecha, definirá procedimientos únicos para la recolección de la información, establecerá las sanciones a aplicar, permitirá un uso amplio de la información recolectada, con distintos grados de accesos, entre otros aspectos.

En función a todo lo expuesto, y dado que AFIP ya cuenta con un régimen vigente y los sistemas informáticos en funcionamiento para la identificación, recolección, verificación y actualización de la información, es que se propone que dicho registro sea administrado por el citado organismo estatal.

Su fundamento es la Recomendación 24³¹ del GAFI.

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (requisitos de las personas y estructuras jurídicas de obtener, mantener y actualizar la información sobre la identidad de los beneficiarios finales).

CAPÍTULO IV

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 11.683, T.O. 1998 Y SUS MODIFICACIONES

ARTÍCULO 31.- Incorporase como inciso h) del párrafo sexto del artículo 101 a la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el siguiente:

h) Para el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, así como los Registros Públicos y organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, en relación a la información incluida en el Registro de Beneficiarios Finales.

Modificación y fundamento: se levanta el secreto fiscal respecto a determinadas autoridades judiciales y organismos administrativos a los fines del acceso oportuno a la información de los beneficiarios finales. Su fundamento es la Recomendación 24 del GAFI.

A su vez, constituye uno de los aspectos del proyecto de Ley que permite cumplir con uno de los cuatro puntos previstos en el apartado 31 del Acuerdo con el FMI (requisitos de las personas y estructuras jurídicas de obtener, mantener y actualizar la información sobre la identidad de los beneficiarios finales).

³¹ La Recomendación 24 del GAFI establece: “Los países deben evaluar los riesgos de uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, y adoptar medidas para prevenir su uso indebido. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso de manera rápida y eficiente, a través de un registro de beneficiario final o un mecanismo alternativo”.

ARTÍCULO 32.- La presente ley entrará en vigencia a los TREINTA (30) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 33.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.